



Acuerdo por megatoma en San Antonio

Monckeberg: "Se está diciendo que saltarse la fila es una alternativa y eso es fatal"

Marcelo Pinto y Benjamín Celedón

El Gobierno consiguió en la víspera un "balón de oxígeno" frente a la crisis de la megatoma de San Antonio. Pero el acuerdo con los dueños del terreno y los ocupantes ilegales para crear una comisión tripartita, que tratará de buscar soluciones en un plazo de seis meses, no resuelve el problema.

Un fallo judicial que ordenaba expresamente el desalojo a partir del 27 de febrero se convierte en "letra muerta", pues la usurpación persiste. Lo que junto con poner en duda la eficacia de las sentencias de los tribunales frente a estos pleitos po-

Exministro de Vivienda advierte que si el plan de La Moneda fracasa, el problema pasará al próximo gobierno.

dría incentivar nuevas ocupaciones.

En El Mercurio, Carlos Peña advirtió hoy sobre los riesgos de validarlas ocupaciones ilícitas por parte de quienes carecen de vivienda: "Consentir la fuerza y las



vías de hecho enseñará a esos otros miles que viven en la pobreza y que no han tenido el arrojo, la audacia o la desesperación de involucrarse en una toma que, quizá, después de todo, hacerlo valga la pena".

A la vez, surgen interrogantes respecto del modo en que finalmente se resolverá el conflicto: el plazo de los seis meses culminará en plena campaña, a dos meses de las elecciones. Y en el ambiente político ya ronda la pregunta de si el Gobierno estará dispuesto a ordenar un desalojo en ese momento, si la mesa tripartita no halla manera de desatar un "nudo" originado hace ya más de cinco años.

"Incentivo para nuevas tomas"

En ese marco, el exministro de Vivienda (Piñera 2), Cristian Monckeberg, dijo a La Segunda que "frente a lo inminente de los hechos, a lo inmediato del cumplimiento del fallo, (el acuerdo impulsado por el Gobierno) era la solución más razonable para avanzar. A la pregunta: ¿Usted hubiese desalojado? Si llegamos a una situación límite, donde no había ninguna flexibilidad, lo que correspondía era desalojar y cumplir el fallo. Afortunadamente, se busca un acuerdo".

Sin embargo, el hoy decano de Ciencias Sociales de la U. del Alba advierte que arreglos de este tipo son riesgosos: "El gran problema, cuando uno está en el Minvu, es que con estas señales uno está diciendo que saltarse la fila es una alternativa y eso es fatal para el Minvu, para el estado de derecho y para las familias que esperan años, que ahorran años, que busca terrenos y no se los toman... Es un incentivo para nuevas tomas".

-La mesa tiene un plazo de 6 meses. ¿Si no hay un acuerdo, el problema será heredado al próximo Gobierno?

-Si no se produce un acuerdo en 6 meses, los incentivos políticos están puestos en que esto lo resuelve el gobierno que viene. Difícil que en plena campaña, el

Gobierno esté empujando un desalojo, más cuando el PC ha dado señales de que no quiere avanzar en esa línea.

En cualquier caso, una de las grandes interrogantes respecto de San Antonio pasa precisamente por el monto de recursos públicos que terminará poniendo el Estado para apagar el "incendio" que constituye esa toma. Por ahora, los ocupantes ilegales tendrían sólo unos \$600 millones para la compra del terreno. Pero las estimaciones sobre el valor comercial del paño son muy superiores y oscilan entre los \$45 mil millones y los \$70 mil millones.

Montes y su diálogo con juez

En la mañana, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, artífice del acuerdo para postergar el desalojo, defendió (Tele 13 Radio) la iniciativa y enfatizó que detrás de la megatoma hay un problema de índole social. Detalló algunas de las acciones que llevó adelante para tratar de buscar una solución frente al problema. Entre ellas, mencionó una conversación con el destituido juez Sergio Muñoz, entonces presidente de 3a sala de la Corte Suprema. "Lo primero que hice fue hablar con (Muñoz), que había visto el caso, para decirle qué alternativas hay", dijo. Y detalló que más tarde Interior tomó contacto con las policías: "Nos reunimos ahí para ver cuál es la viabilidad, qué implicaría (un desalojo). Y a partir de lo cual llegamos a una conclusión que no nos quedaba otra que buscar una solución", explicó.

Montes planteó que siempre será posible hacer un desalojo, aunque con un "costo humano", por la cantidad de personas -niños y adultos mayores, entre ellos- involucradas. Apuntó también a las dificultades operativas de un lanzamiento a gran escala: "Es con, no sé, a lo mejor mil policías que tienen que dedicarse un tiempo largo a esto. O sea, por lo tanto, dejan (de cumplir tareas) en otros lugares. Este es un problema de la sociedad".